

REPUBLICA DOMINICANA

La República Dominicana es una democracia constitucional y representativa, con una población de aproximadamente 9.4 millones de personas, incluyendo a cientos de miles de haitianos indocumentados. En agosto de 2004 el Presidente Leonel Fernández del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) fue elegido por un segundo período no consecutivo, y en las elecciones de 2006 el PLD ganó la mayoría en ambas cámaras legislativas.

Observadores extranjeros imparciales evaluaron ambos procesos electorales. Concluyeron que éstos fueron mayormente libres y justos. Aunque las autoridades civiles generalmente mantuvieron control efectivo de los organismos de seguridad, se produjeron circunstancias donde elementos de estos organismos actuaron de manera independiente.

Aunque la trayectoria gubernamental en torno a los derechos humanos mejoró algo, serios problemas permanecieron, tales como: muertes ilegales; golpizas y otros abusos cometidos contra sospechosos, detenidos y prisioneros; las condiciones de las prisiones continuaban pobres o críticas; continuaron los arrestos arbitrarios y la detención de sospechosos; un gran número de personas funcionalmente apátridas; corrupción generalizada; acoso a grupos de derechos humanos; violencia y discriminación contra las mujeres; prostitución infantil y otros abusos en contra de los niños; tráfico de personas; severa discriminación contra los inmigrantes haitianos y sus descendientes; y el irrespeto a los derechos laborales fundamentales.

RESPECTO A LOS DERECHOS HUMANOS

Sección 1 Respeto de la integridad de la persona, incluyendo el no sufrir de los siguientes puntos:

a. Privación arbitraria o ilegal de la vida

El gobierno o sus organismos no cometieron ningún crimen en base a motivaciones políticas; sin embargo, los organismos de seguridad estuvieron involucrados en muchas muertes que fueron ilegales, injustificadas, o estuvieron involucrados en un excesivo uso de la fuerza.

De acuerdo a la Procuraduría General de la República, en aproximadamente 16 de cada 100 muertes violentas desde enero de 2005 estuvieron involucrados los organismos de seguridad. La Procuraduría redefinió la causa de estas muertes violentas en las que están involucrados los organismos de seguridad, y en lugar de llamarse "intercambio de disparos" ahora les llama "muertos por la Policía Nacional en el desempeño de sus funciones". Desde enero hasta agosto, el informe señala que la policía mató a 173 personas en el desempeño de sus funciones, aproximadamente el 13 por ciento de todas las muertes violentas. Estas muertes fueron atribuidas mayormente a una falta de entrenamiento y de responsabilidad de rendir cuentas así como a una supervisión mínima.

En julio los medios informaron de una muerte debido a confrontaciones con los organismos de seguridad durante una huelga nacional; sin embargo, los detalles fueron poco precisos, y no hubo confirmación de que los organismos de seguridad fueran los responsables de esta muerte.

En agosto la policía le disparó y mató a Rafael Concepción, dueño de un lugar de apuestas, quien alegadamente le había disparado antes a un ladrón. Testigos oculares informaron que la policía le disparó a Concepción a quemarropa mientras estaba bajo custodia, y aunque parecía cooperar. El inspector general nombró una comisión para investigar el caso y detener a los oficiales que cometieron el hecho.

Contrario al año anterior, el Director de Prisiones no informó de muertes por negligencia dentro del sistema carcelario.

Organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, aunque concedieron que la situación mejoró algo durante este año, acertaron que así como en años anteriores, la policía continuó empleando fuerza letal injustificada en contra de sospechosos criminales.

En enero los tribunales condenaron a períodos de prisión de 10 a 20 años a cuatro de ocho militares acusados de las muertes de 25 haitianos que eran transportados cruzando la frontera detrás de un camión en el 2006.

No hubo información disponible sobre la resolución judicial de los casos del 2006 de dos sargentos policiales acusados de homicidio en la muerte de Luis Manuel Ventura, de dos oficiales policiales acusados de la muerte de Elvin Amable Rodríguez, o de los dos policías acusados de la muerte de una niña de 12 años, su tía y un sospechoso criminal en 2005.

En una cantidad de ocasiones, ciudadanos atacaron en represalia a alegados criminales, haciendo justicia con sus propias manos por diferentes robos o atracos. En febrero, en Yaguata, San Cristóbal, una turba torturó y mató a dos alegados ladrones. Estos incidentes fueron atribuidos a un aumento en la criminalidad y la incapacidad de las fuerzas de seguridad para acabar o combatir estos crímenes.

b. Desapariciones

No hubo informe de desapariciones políticas.

En mayo el Ministerio Público anunció que reabrirla una investigación con respecto al caso del periodista desaparecido Narciso González, quien desapareció en 1994 luego de alegadamente criticar al gobierno. Hubo alegatos creíbles de que agentes de inteligencia lo detuvieron.

c. Tortura y Otros Tratos o Castigos Crueles, Inhumanos o Degradantes

Aunque la ley prohíbe la tortura, las palizas y el abuso físico de los detenidos y encarcelados, miembros de las fuerzas de seguridad, principalmente la policía, continuaron esas prácticas. La Procuraduría informó que la policía estuvo involucrada en incidentes que dieron como resultado la mutilación o el daño severo a civiles desarmados. Sin embargo, mejoras en la supervisión y la concienciación condujeron a una percepción de que la policía estaba haciendo esfuerzos por reducir incidentes de abuso físico de los detenidos. No obstante, organizaciones de derechos humanos

informaron que el tomar la justicia en las propias manos por personas uniformadas persistió a un nivel menor que letal.

La ley contempla sanciones por tortura o abusos físicos, incluyendo sentencias de entre 10 y 15 años de prisión. Abogados civiles a veces presentaron cargos contra oficiales de la policía o militares, alegando tortura, abuso físico y crímenes similares. Las autoridades enviaron nuevos casos de abuso y tortura a los tribunales civiles en lugar de los tribunales policiales.

Los oficiales policiales de alto rango trataron la prohibición de la tortura y abuso físico con seriedad, pero la falta de supervisión, entrenamiento y transparencia en todo el sistema legal y correctivo menoscaban los esfuerzos para controlar este problema. Aunque observadores estuvieron de acuerdo en que las condiciones mejoraron, en cierta forma debido a un incremento de oficiales de corrección entrenados, grupos de derechos humanos y personas encarceladas informaron de la ocurrencia de abuso físico a detenidos, mayormente palizas. Algunos observadores consideraron que los oficiales civiles de corrección carecían de la disciplina y la cohesión del personal militar que ellos sustituyeron y que estuvieron más inclinados a la insubordinación y al abuso de las personas encarceladas.

En julio la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una ONG, presentó una querrela en contra de la policía con respecto al caso de Javier Vicente Reyes Segura, quien de acuerdo con informes de prensa estaba manejando en Santiago cuando una patrulla de la policía comenzó a dispararle a su vehículo. Cuando Reyes se dio cuenta de que era la policía que le estaba disparando, él se detuvo, bajó de su vehículo, se arrodilló, y le rogó a la policía que no lo matara. Por el contrario, ellos le dispararon a quemarropa en su pierna derecha, dejándolo incapacitado para caminar.

No hubo información disponible sobre un juicio a dos oficiales por los cargos de tortura a Dionisio Contreras en el 2006.

Hubo informes del uso excesivo de fuerza contra manifestantes y protestantes de parte de miembros de los organismos de seguridad.

Abogados de la Fiscalía del Distrito Nacional monitorearon el proceso investigativo para garantizar que se respetaran los derechos de los detenidos en estaciones policiales de alto volumen y en varias oficinas de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). La evidencia indica que los fiscales muchas veces consintieron las prácticas policiales impropias en lugar de insistir que cambiaran para ajustarse a las normas constitucionales.

Condiciones Carcelarias y en los Centros de Detención

Las condiciones carcelarias eran de malas a extremadamente duras en muchas prisiones, aunque los prisioneros en "prisiones modelos" experimentaron mejores condiciones. Fueron comunes los informes sobre maltratos y violencia de presos. Las prisiones se encontraban seriamente superpobladas; las condiciones sanitarias y de salud eran pobres, y algunas prisiones estaban fuera del control de las autoridades y efectivamente gobernadas por pandillas criminales de presos armados. Un sentimiento común entre los guardias de las prisiones es que aunque ellos controlan el perímetro de la prisión, dentro de la misma los presos a menudo tienen sus propias reglas y crean su propio sistema de justicia.

Las partidas presupuestarias para necesidades tales como alimentos, medicina y transporte no eran suficientes. La mayoría de los prisioneros tienen que mendigar o comprar alimentos de los residentes de los barrios cercanos a las prisiones u obtenerla de familiares. Los presos a menudo no eran transportados a sus causas a no ser que pagaran sobornos a los guardianes (refiérase a las secciones 1.d. y 1.e.), y los visitantes a menudo tenían que sobornar a los guardias para poder visitar a los prisioneros. Similarmente, los detenidos tenían que pagar sobornos para que se les permitiera acceder al entrenamiento vocacional que se ofrece en algunas instalaciones. Oficiales carcelarios a menudo aceptaron sobornos a cambio de recomendar que al preso se le diera un permiso para que fuera puesto en libertad por razones de salud. Las prisiones a menudo no ofrecieron el debido cuidado médico a los presos, en tanto que presos inmovilizados por el VIH/SIDA y otras enfermedades terminales no fueron transferidos a hospitales.

Según la Dirección General de Prisiones, había aproximadamente 15,400 presos y detenidos en 35 prisiones con una capacidad instalada para aproximadamente 9,000 detenidos. Virtualmente todas las prisiones experimentaron una sobrepoblación extrema. La Victoria, que es la prisión más grande del país, tenía más de 3,700 presos en unas instalaciones diseñadas para 1,600, y con camas para menos de 1,800 internos. Los oficiales estiman que la totalidad del sistema de prisiones ofrece 6,300 camas, lo que deja a más 7,000 presos durmiendo en el suelo.

Aunque es un guardia que se reporta al Procurador General quien es técnicamente el responsable de administrar cada prisión, en la práctica son oficiales militares y policiales encargados de la seguridad (generalmente nombrados por un período de sólo tres a seis meses) quienes están a cargo de la mayoría de las prisiones. Aproximadamente el 80 por ciento de los guardias de las prisiones eran oficiales policiales y militares en lugar de oficiales civiles correccionales.

Continuaron los alegatos de tráfico de drogas y de armas, de prostitución, y de abuso sexual dentro de las prisiones.

Continuaron existiendo secciones especiales dentro de las prisiones donde estuvieron internos oficiales policiales condenados por actividad criminal, incluyendo a unos cuantos conocidos abusadores de los derechos humanos.

Las autoridades fiscales traspapelaron expedientes claves asociados con el motín y el fuego que mató al menos a 136 presos en la Prisión de Higüey, y no se obtuvo condenas.

Generalmente se separaron a las mujeres de los hombres. La mitad del total de la población femenina fue retenida en prisión sólo para mujeres. Las condiciones en los pabellones de mujeres eran generalmente mejores que las condiciones en los pabellones de hombres. A las internas mujeres, a diferencia de sus contrapartes hombres, se les prohibieron las visitas conyugales. A las que parieron en las cárceles se les permitió mantener a sus hijos por al menos un año.

Las autoridades muchas veces detuvieron a jóvenes con la población carcelaria general y muchas veces trataron a menores como adultos y los encarcelaron en prisiones en lugar de centros de detención juveniles.

Debido a la seria sobrepoblación, las autoridades en muchas instalaciones más pequeñas, no segregaron a los presos de acuerdo a la severidad de su delito criminal.

Se detuvieron a presos preventivos junto a presos condenados. La Dirección General de Prisiones estimó en un informe de abril que sólo el 27 por ciento de los detenidos en prisión habían sido condenados; el 73 por ciento restante estuvo en custodia preventiva esperando juicio. Más tarde en el año, el director de prisiones estimó que este número había bajado aproximadamente a un 60 por ciento. También se hicieron pocos esfuerzos por segregar y proporcionar servicios a los enfermos mentales, especialmente en las prisiones tradicionales.

Las autoridades continuaron la modernización de algunas prisiones para crear cárceles "modelo"; mejoraron las envejecidas plantas físicas de las instalaciones existentes, reemplazaron policías y militares con oficiales correccionales entrenados profesionalmente bajo la autoridad del Ministerio Público, y se enfocaron en la rehabilitación y el entrenamiento vocacional de los internos. En septiembre las autoridades comenzaron la conversión y remodelación de la Prisión de Salcedo en una instalación modelo. El Procurador General informó que la incidencia de corrupción dentro de estas prisiones se mantuvo al mínimo. Sin embargo, esta mejoría para algunos presos llegó a expensas de otras en el sistema, porque cuando una instalación es convertida en modelo, el exceso de internos es transferido a otros lugares, principalmente La Victoria, aumentando así la presión sobre la ya súper poblada instalación.

El gobierno autorizó visitas a las prisiones a observadores de derechos humanos y a la prensa, y dichas visitas se produjeron en el transcurso del año.

Arresto o Detención Arbitraria

Aunque el Código de Procesal Penal (CPP) prohíbe la detención sin orden judicial salvo en el caso de que el sospechoso sea atrapado in fraganti o en otras circunstancias limitadas, los arrestos y detenciones arbitrarios siguieron siendo un problema. Por ley, las autoridades pueden detener a una persona sin cargos hasta 48 horas. Se presentaron muchos informes de individuos encarcelados y luego liberados con poca o ninguna explicación del arresto.

Rol de la Policía y del Aparato de Seguridad

La Policía Nacional, el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el Consejo de Seguridad Aeroportuaria (CESA), el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (CESFRONT), el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESEP), y las Fuerzas Armadas (el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina de Guerra) conforman las fuerzas de seguridad. La Secretaría de Estado de Interior Y Policía es la responsable de tomar decisiones de políticas que afectan a la Policía. La responsabilidad doméstica de los militares incluye mantener el orden público y proteger a las personas y las propiedades. Los militares, el CESA, el CESFRONT y el CESEP están bajo el mando del Secretario de las Fuerzas Armadas; el DNI y la DNCD, con personal tanto policial y militar, se reportan directamente al Presidente.

Las Fuerzas Armadas continuaron proporcionando tropas para apoyar a la Policía nacional en sus patrullajes nocturnos en Santo Domingo, Santiago y otras áreas del país.

Un nuevo Jefe de la Policía nombrado en agosto anunció una política de tolerancia cero a los abusos y las violaciones de los derechos humanos, y dijo que tenía tres prioridades: mejorar el entrenamiento, aumentar la transparencia, y modernizar el equipo y la infraestructura. Sin embargo, desde el nombramiento del nuevo jefe, continuaron los informes de hechos de uso cuestionable de la fuerza.

La Unidad de Asuntos Internos realizó investigaciones sobre las acusaciones graves de mala conducta a miembros de la Policía Nacional. Estos casos involucraron la agresión física, las amenazas de muerte, uso inapropiado de un arma de fuego, agresión verbal, asaltos y robos. Al mes de junio las autoridades expulsaron a 767 policías, además de 2,233 que fueron previamente expulsados por mala conducta grave, y acusaron a más de 208 oficiales por delitos cometidos mientras estaban trabajando, comparados con 628 descubrimientos de mala conducta delictiva en los primeros 10 meses del año anterior.

En muchas ocasiones oficiales policiales intentaron solicitar sobornos de individuos que enfrentaban el arresto o la imposición de multas. Observadores locales de derechos humanos reportaron algunas ocasiones en las que las autoridades de inmigración recogían a obreros de la construcción y labriegos haitianos y dominico-haitianos, así como a otros trabajadores manuales, pero funcionarios de la Secretaría de Trabajo reportaron que esto pasó menos frecuentemente que en 2006. Alegadamente oficiales tomaban a grupos de personas de piel más oscura o con "aspecto de haitianos" a edificios vacíos justo luego de recibir sus pagos para extorsionarlos. ONG's alegaron corrupción entre los oficiales militares y de migración estacionados en los puestos de la frontera y notaron que estos oficiales algunas veces fueron cómplices en el tránsito ilegal de trabajadores haitianos hacia el país.

El Instituto para la Dignidad Humana, rama de la Policía Nacional, realizó cursos de entrenamiento a los oficiales policiales. En el currículum policial revisado, tanto los oficiales nuevos como los ya existentes recibieron entrenamiento en derechos humanos y civiles así como más entrenamiento técnico. Además, el currículum de la Academia de la Policía incluyó una política concerniente al uso de la fuerza, en la que se entrenó a algunos oficiales policiales para atrapar a sospechosos con menos fuerza letal.

El entrenamiento para el personal militar y de la DNCD en listado, abarcó instrucción en derechos humanos. El Instituto Militar de Derechos Humanos ofreció diplomas de cursos sobre derechos humanos y regularmente envió representantes a unidades fronterizas a obtener entrenamiento obligatorio en derechos humanos.

Detención y Arresto

La Constitución contempla que el acusado no puede ser retenido por más de 48 horas sin sometimiento ante las autoridades judiciales. También estipula el recurso de poder solicitar un Habeas Corpus. Cualquier persona detenida por más de 48 horas sin ser formalmente acusado tiene el derecho de presentar un recurso de Habeas Corpus. El juez que presida en la audiencia de habeas corpus tiene la potestad para ordenar la libertad de la persona cuando ésta haya sido detenida por

más de 48 horas sin que formalmente se presentaran cargos contra ella o cuando no haya pruebas suficientes del crimen para seguir deteniéndolo. La decisión del juez para liberar al preso está sujeta a apelación por parte del fiscal.

A pesar de las disposiciones anteriores, a veces la policía detenía al sospechoso con fines de investigación o interrogatorio más allá del límite de 48 horas. La Policía con frecuencia detenía a todos los sospechosos y testigos de un crimen y usaba el proceso investigativo para determinar quiénes eran inocentes y ameritaban ser liberados y a quiénes deberían mantener en prisión. Aún así, las exitosas audiencias de habeas corpus redujeron significativamente estos abusos.

Dada la ineficiencia de los tribunales y la corrupción dentro del sistema judicial, una cantidad significativa de acusados a quienes se les dio fianza no comparecieron ante los tribunales para un juicio. Aunque otorgada anteriormente sólo a algunos acusados, la fianza se hizo más común bajo el nuevo Código Procesal Penal, que exige una revisión judicial de las detenciones en un punto más temprano de un caso criminal, pero el sistema probó ser inadecuado para evitar que los acusados se desaparecieran.

La ley contempla la asesoría legal a los acusados indigentes, pero la mayoría de los detenidos y presos que no pueden costear los servicios de defensa no encontraron acceso rápido a dicha asesoría legal. La Oficina Nacional de Defensa Judicial, con el apoyo de donantes extranjeros, ofreció servicios de asesoría legal y representación judicial a personas indigentes, pero las limitaciones de los recursos tuvieron como resultado un inadecuado nivel de personal empleado. El gobierno continuó con su programa para entrenar a los defensores públicos sobre cambios relevantes ocasionados por la entrada en vigor del nuevo Código Procesal Penal y expandió el entrenamiento a los fiscales. Como manda la ley, la Procuraduría General puso mayor énfasis en proporcionar asistencia a las víctimas de crímenes mediante la conducción de casos civiles para las víctimas que no tenían los medios para contratar un abogado privado.

La Policía continuó la práctica, aunque menos frecuentemente, de hacer barridas o redadas en comunidades de bajos ingresos y alta criminalidad, durante las cuales arrestaron y detuvieron a individuos sin orden de arresto, supuestamente para luchar contra la delincuencia. Durante estas redadas, la policía arrestó grandes cantidades de residentes y confiscaron propiedad personal de los arrestados.

Muchos sospechosos sufrieron largas detenciones preventivas. Mediante el Código Procesal Penal, el juez tiene la autoridad para ordenar que el detenido permanezca bajo la custodia policial por un plazo de tres meses a un año. De acuerdo a la Dirección Nacional de Prisiones, el tiempo promedio de detención preventiva disminuyó, pero típicamente estaba entre tres y seis meses. El tiempo servido en detención preventiva contaba para completar una pena. El Ministerio Público implementó un nuevo sistema de rastreo de casos que les permitió a los fiscales ajustarse más efectivamente a las regulaciones sobre detención preventiva y reducir así el número de ocasiones en que se excedían los límites de tiempo del Código.

Los menores retenidos en el Departamento para Menores del destacamento policial de Villa Juana, generalmente se retenían más allá del límite de 12 horas para el envío del caso a la Fiscalía. La ley prohíbe el interrogatorio de menores por parte de

la policía o en presencia de la policía; los fiscales y los jueces manejan el interrogatorio.

La incapacidad de las autoridades penitenciarias de llevar a los acusados a las citaciones judiciales provocó la posposición de un porcentaje significativo de casos. Con frecuencia se posponían las fechas de las audiencias de los presos porque no se les llevaba de las prisiones a los tribunales o porque sus abogados, coacusados, o testigos no aparecían. El gobierno carecía de fondos para transportar a todos los acusados entre la prisión y el tribunal. A pesar de las protecciones adicionales de los acusados en el Código Procesal Penal, en algunos casos las autoridades seguían reteniendo algunos acusados más allá de las fechas límites aunque no hubiesen cargos formales en su contra.

El poder judicial implementó con éxito un número de medidas para reducir el atraso grande de casos criminales mediante el anterior Código Procesal Penal, y la Suprema Corte de Justicia asignó jueces especiales (Tribunales de Liquidación) dedicados exclusivamente a resolverlos. Además, la Justicia estableció oficinas de servicios judiciales en La Vega, Moca, y Puerto Plata que permitieron que se atendieran asuntos urgentes que necesitaban de un juez (como la obtención de una orden de arresto o de allanamiento y la conducción de comparecencias) las 24 horas del día.

e. Negación del Derecho a un Juicio Público Justo

La ley establece un sistema judicial independiente; sin embargo, la independencia judicial siguió en peligro por las prácticas corruptas. La interferencia de parte de entidades públicas, cuando ocurrió, tendió hacia los pronunciamientos públicos con respecto a casos activos y persecución selectiva, contrario a la intervención directa en los casos ya existentes. En ocasiones, sin embargo, jueces de tribunales superiores intentaron influir incorrectamente en las decisiones de tribunales inferiores.

El poder judicial comprende una Suprema Corte compuesta por 16 jueces, varias cortes de apelación, tribunales de primera instancia y juzgados de paz. Existen tribunales especializados para manejar asuntos contenciosos de carácter fiscal, laboral, de tierras y de menores. Un Consejo de la Magistratura selecciona a los jueces de la Suprema Corte, aunque la composición política del consejo deja abierta la posibilidad de nombramientos patrocinados. Los jueces de los tribunales inferiores son seleccionados luego de pasar por unos rigurosos exámenes de entrada, de realizar un programa de entrenamiento, y de terminar exitosamente un examen.

El profesionalismo del sistema judicial siguió mejorando, en gran medida como resultado de un programa de entrenamiento intensivo para los jueces luego de entrar, así como de la continuación de una educación legal. Sin embargo, la mayoría de los jueces no pudieron manejar casos complejos, especialmente en las áreas de lavado de dinero y de fraude.

El profesionalismo de los abogados continuó estando inconsistente, sin estándares formales mínimos para los abogados en general y para miles de personas ejerciendo el Derecho sin el beneficio de al menos una preparación académica mínima. El Colegio Dominicano de Abogados argumentó consistentemente en contra de los

exámenes para obtener el exequátur. Sin embargo, los defensores públicos y fiscales estuvieron típicamente bien calificados; sus organizaciones particulares exigían pasar exámenes de empleo objetivos.

Procedimientos Judiciales

La ley contempla la presunción de inocencia, el derecho de apelación y el derecho a confrontar o cuestionar a los testigos. La ley establece el derecho del ciudadano a no ser privado de libertad sin juicio ni sin cumplir las formalidades legales o por otras razones que no sean las contempladas en la ley, el derecho a la no auto incriminación, y derecho de defensa ante un tribunal imparcial y público. Los acusados tienen derecho a permanecer en silencio. Hubo alegatos creíbles de que las autoridades violaban estos derechos en algunos casos, pero hubo un apego mejorado al debido proceso ya que las autoridades se fueron familiarizando cada vez más con las modificaciones al Código Procesal Penal.

Aunque previamente los tribunales policiales y militares ejercían jurisdicción exclusiva sobre los casos que involucran a miembros de los organismos de seguridad, los tribunales civiles manejaron casos de muertes alegadamente cometidas por miembros de los organismos de seguridad durante el año.

Detenidos y Prisioneros Políticos

No se presentó ningún informe de prisioneros o detenidos por razones políticas.

Procedimientos Judiciales Civiles y Remedios

Existen tribunales de acusación independientes para asuntos de Derecho Penal, Comercial y Civil, y Laboral. Los tribunales para asuntos comerciales, civiles y laborales, según se informa, sufrieron largos atrasos en la adjudicación de los casos, aunque por lo general, se aplicaron sus decisiones. Como en los tribunales penales, la indebida fluencia económica y política en las decisiones del tribunal seguía siendo un problema.

Los ciudadanos tienen el recurso de amparo, un acto de reparación de cualquier violación de un derecho constitucional, incluyendo violación parte de cualquier funcionario judicial. Sin embargo, este recurso raramente fue utilizado, excepto por aquellos con abogados más sofisticados.

f. Interferencia Arbitraria en la Intimidad, la Familia, el Hogar o la Correspondencia

La ley prohíbe la entrada arbitraria en una residencia privada excepto cuando la policía esté en persecución de un sospechoso o cuando el mismo sea atrapado al momento de cometer un delito. La ley contempla que cualquier otro tipo de entradas en los hogares requiere de la emisión de una orden de allanamiento o de arresto por parte de un juez. Sin embargo, en la práctica, la policía perpetró allanamiento y confiscaciones ilegales, incluyendo redadas sin orden judicial en residencias privadas de muchos barrios pobres de Santo Domingo.

Aunque el gobierno niega el uso de las interceptaciones telefónicas no autorizadas y de otros métodos subrepticios de interferencia en la vida privada de individuos y familias, organizaciones que luchan por los derechos humanos alegaron que dichas interferencias continúan produciéndose.

Sección 2 Respeto de las Libertades Civiles, Incluyendo:

Libertad de expresión y de prensa

La ley contempla la libertad de expresión y de prensa y en la práctica, el Gobierno generalmente respetó dichos derechos. Los individuos y grupos en general, pudieron criticar públicamente y en privado al Gobierno sin que hubiera represalias.

Los periódicos y revistas presentaron diversidad de opiniones y de críticas. Hay ocho diarios, y varios semanales, así como varios periódicos en línea. En ocasiones los editores practicaron la autocensura, especialmente cuando la cobertura pudiera afectar negativamente los intereses económicos y políticos de los dueños de los medios, como los juicios que siguieron a los grandes fraudes bancarios de 2003, ya que los bancos y familias de banqueros eran los dueños de periódicos prominentes.

En agosto, el periódico Listín Diario publicó editoriales con aseveraciones que fueron firmemente negadas por Participación Ciudadana, un grupo local de la sociedad civil, que había exhortado a que haya transparencia en el caso de fraude bancario del Banco Intercontinental (Baninter) de 2003. El acusado principal, dueño de Baninter, también es dueño de Listín Diario.

Había muchas estaciones de radio y televisión privadas, emitiendo un amplio espectro de opiniones políticas. El Gobierno controlaba una estación de televisión. Los medios de comunicación internacionales pudieron operar libremente.

A diferencia del año anterior, la Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa no reportó el asesinato de ningún periodista en el país; sin embargo, reportó que las autoridades civiles, policiales y militares, delincuentes y otras personas agredieron o amenazaron a más de 40 periodistas durante el año. Entre enero y junio, la ONG Reporteros sin Fronteras, reportaron más de 25 amenazas de violencia en contra de periodistas o de ataques físicos a organizaciones noticieras en las que los responsables eran muchas veces las fuerzas de seguridad. El gobierno hizo poco para investigar las amenazas de violencia o de ataques físicos a periodistas, pero un tribunal negó una apelación de Vladimir Pujols y reafirmó su condena a 30 años por el homicidio del periodista Juan Andujar en 2004. Un tribunal también condenó a personas involucradas en la muerte del periodista Orlando Martínez en 1975.

Libertad de Acceso al Internet.

No hubo restricción por parte del Gobierno del acceso al Internet ni se presentaron informes de correo electrónico, ni salas de chateo monitoreados el Gobierno. Los individuos y los grupos podían hacer expresar pacíficamente su opinión vía Internet, incluyendo el correo electrónico.

Libertad Académica y Eventos Culturales

No hubo restricción gubernamental sobre la libertad académica y los eventos culturales.

b. Libertad de Asociación y Reunión Pacífica

Libertad de Reunión

La ley contempla la libertad de reunión, pero las marchas y reuniones públicas requieren de un permiso, generalmente concedido por el Gobierno. En algunas ocasiones cuando los oficiales de la policía usaron la fuerza para disolver manifestaciones públicas espontáneas, provocando lesiones a manifestantes y observadores.

Libertad de Asociación

La ley contempla la libertad de asociación, y el Gobierno, en general, en la práctica respetó este derecho.

c. Libertad de Culto

La constitución contempla la libertad de cultos, y el Gobierno por lo general, respetó dicha libertad. La ley prohíbe la discriminación por motivos religiosos, y muchas denominaciones estuvieron activas.

La Iglesia Católica disfrutaba de muchos privilegios que no eran extendidos a otras religiones, según los términos del Concordato. Por ejemplo, el Cardenal tiene el rango de un oficial militar y hay una Iglesia Católica en el Palacio Presidencial. La Iglesia Católica también recibió fondos públicos para cubrir algunos de los gastos de la misma tales como rehabilitaciones de iglesias.

Abusos y Discriminación Sociales

No hubo informes de abusos sociales o discriminación contra miembros de grupos religiosos. La comunidad Judía es muy pequeña, y no hubo informes de actos antisemitas.

Para mayor información, refiérase al Informe Internacional de 2007 sobre Libertad de Religión.

d. Libertad de Movimiento, Personas Desplazadas Internamente, Protección de Refugiados, y Personas Apátridas.

La ley contempla la libertad de movimiento dentro del país, viaje al extranjero, emigración y repatriación, y el gobierno generalmente respetó estos derechos en la práctica; sin embargo, hubo algunas excepciones. Grupos de derechos humanos locales e internacionales reportaron que cientos de miles de personas sin documentación apropiada, incluyendo a inmigrantes haitianos, enfrentaron obstáculos al viajar tanto dentro como hacia fuera del país.

La ley prohíbe el exilio forzoso, y no se presentaron informes sobre su uso.

Aunque el gobierno reclamó que ya no practicaba la deportación masiva, todavía hubo incidentes reportados de repatriación masiva. La nueva autoridad de control fronterizo reportó que repatrió a 11,000 haitianos entre septiembre y noviembre. Hubo informes creíbles de que en la mayoría de esos casos el gobierno no siguió un debido proceso, a pesar de los términos de un acuerdo bilateral con Haití con respecto a la repatriación de haitianos indocumentados.

Protección de Refugiados

La ley estipula la concesión de condición de refugiado o de asilo de conformidad con la Convención de la ONU de 1951 relativa a la Condición Jurídica y Social de los Refugiados y su Protocolo de 1967, pero el Gobierno no ha creado un sistema de protección de los refugiados. En la práctica, el Gobierno ofreció alguna protección contra la expulsión, el regreso de personas a un país donde haya razón para creer que serán perseguidos. Esta protección fue generalmente aplicada a individuos que habían tenido acceso al proceso de refugio y se les había emitido una prueba de que eran refugiados o que tenían solicitudes pendientes. Sin embargo, el Gobierno no aplicó las normas acordadas con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) para mejorar la recepción y adjudicación de las solicitudes de refugio.

Una persona que solicite la condición de refugiado debe ser referida por la Oficina Nacional de Refugiados en la Dirección General de Migración al Subcomité Técnico de la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE), presidida por la Secretaría de Relaciones Exteriores. El subcomité tiene la responsabilidad de presentar su recomendación a la Comisión, formada por miembros de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el DNI y la Dirección General de Migración. La Comisión en pleno tiene la responsabilidad de tomar la decisión final respecto a la solicitud, pero se reunió sólo una vez durante los últimos 13 años. La Comisión comprende a tres miembros del subcomité, al Consultor Jurídico del Presidente y a miembros de la Policía Nacional, la Secretaría de Trabajo, y la Procuraduría General.

Hasta octubre, la Dirección de Migración reportó más de 300 solicitudes, casi todas hechas por haitianos. Algunos de estos casos están pendientes de decisión desde el 2000. De acuerdo al Servicio Jesuita de Refugiados, una ONG, miles de otros solicitantes de asilo presentaron quejas que no habían sido procesadas, dejando a las personas en un estado de limbo legal. La mayoría de estos individuos carecían de documentación suficiente para obtener permiso de trabajar legalmente y ejercer otros derechos, como la obtención de documentos para sus hijos.

El Comité de Refugiados Políticos Unificados por sus Derechos continuó reportando que los refugiados haitianos que solicitan renovar los documentos válidos de residencia fueron algunas veces deportados cuando los oficiales de inmigración no pudieron localizar sus expedientes en la imprecisa base de datos gubernamental.

La Convención de 1951 de la ONU con respecto al Estatus de Refugiados establece que los hijos de los refugiados también tienen derecho a la condición de refugiado. Se presentaron informes indicando a que los hijos de refugiados haitianos – aun aquéllos nacidos de quienes tienen documentos de migración – se les negaba rutinariamente el certificado de nacimiento, así como la educación, la asistencia sanitaria y la documentación de seguridad. En este respecto, ellos recibían el mismo trato que cualquier inmigrante indocumentado haitiano.

Personas Apátridas

La Constitución establece que toda persona nacida en el país es un ciudadano, excepto los hijos de diplomáticos o de quienes están "en tránsito". Sin embargo, regularmente se les negó el registro como ciudadanos a los hijos de padres haitianos en el país amparados en la excepción de tránsito, aún cuando sus padres y abuelos hayan residido en por un largo período de tiempo en el país. En 2005, la Suprema Corte de Justicia dictaminó que el estatus de tránsito se aplica a los hijos de inmigrantes indocumentados.

Los consulados haitianos reportaron que están legalmente autorizados a registrar sólo los nacimientos que son declarados dentro del período de tiempo de un año. A los padres que declaran un nacimiento se les requiere presentar formas válidas de identificación para hacer el registro. Una cantidad significativa de haitianos en el país no pudo cumplir con estos requerimientos, y por lo tanto sus hijos permanecen indocumentados. En consecuencia, miles de personas de ascendencia haitiana, nacidos en territorio dominicano, son funcionalmente apátridas; un estimado ubicó la cantidad entre 600,000 y un millón de personas.

Los dominicanos y los dominicanos de ascendencia haitiana que no disponen de documentos de identidad o de ciudadanía enfrentaron obstáculos para viajar tanto dentro como fuera del país. Además, las personas que son indocumentadas no pueden obtener una cédula de identidad y electoral. Las personas sin cédula tienen acceso limitado al sector formal de trabajo, a la educación pública superior, al acta de matrimonio o de nacimiento, a los servicios formales de la economía como los bancos y préstamos, acceso a los tribunales y a los procesos judiciales, y a poseer tierras y propiedades.

Funcionarios del gobierno muchas veces tomaron medidas fuertes relacionadas con personas de ascendencia haitiana. En marzo la Junta Central Electoral (JCE) les ordenó a los funcionarios que se abstuviesen de emitir, firmar, y copiar certificados de nacimiento a individuos cuyos padres fuesen extranjeros y que no probaran legalmente su residencia. Esto dio como resultado casos de cancelación retroactiva de documentos de identidad y de nacimiento, muchos pertenecientes a personas de ascendencia haitiana. El gobierno declaró que dichas cancelaciones se basaron en la evidencia de que los certificados se habían obtenido de forma fraudulenta y de que 300 involucraban a padres haitianos. Sin embargo, los críticos alegaron que las revocaciones estaban dirigidas a personas cuyos padres fuesen haitianos o que cuyos nombres sonaran haitianos. ONGs reportaron algunos casos de menores que al cumplir los 18, solicitaron una cédula, y les cancelaron sus actas de nacimiento en el libro de registros, y les negaron sus solicitudes de cédula para poder votar; no obstante, funcionarios de la Junta Central Electoral declararon que ellos no conocían de ningún caso. Las ONGs también informaron que funcionarios del gobierno intensificaron esta práctica durante el año.

En marzo la Junta Central Electoral creó un sistema de registro que les permite a los niños nacidos en el país, de padres que no son residentes legales, recibir un acta de nacimiento especial. Esto incluyó un libro de registro para extranjeros (Libro de Extranjería). Las regulaciones estipularon que los hijos de padres que no sean residentes legales del país y que tengan documentación de su país de origen pueden registrar a sus hijos en el libro de extranjería, luego de lo cual a los padres se les da un reporte oficial de nacimiento, el cual no confiere ciudadanía. Sólo los niños que

nacen en hospitales son elegibles para ser registrados en el libro. A los hijos de madres indocumentadas se les da un acta de nacimiento provisional hasta que la madre obtenga sus documentos. Una madre indocumentada puede hacer una declaración tardía en el registro civil presentando las actas de nacimiento de sus padres. Sin embargo, la mayoría de madres indocumentadas no pudieron cumplir con este requisito ya que sus padres tampoco tenían documentos.

En octubre la Junta Central Electoral le negó a Norberto Selvi una copia de su acta de nacimiento. Selvi, nacido y criado en San Luís, tenía un pasaporte pero necesitaba un acta de nacimiento nueva. La prensa reportó que un juez de la Junta ordenó que a Selvi no se le emitiera un acta de nacimiento ya que sus padres eran haitianos.

ONGs locales reportaron que desde la implantación del libro de extranjería, los hospitales y los registros civiles no registraron a numerosos niños padres haitianos.

En 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el gobierno había violado el derecho a la nacionalidad de dos niñas dominicanas de ascendencia haitiana al negarles actas de nacimiento. En marzo la Secretaría de Relaciones Exteriores le dijo a la corte que el gobierno había hecho el pago impuesto por la corte a las dos niñas, pero no hubo más acontecimientos con respecto a otorgarles la nacionalidad.

Sección 3 Respeto a los Derechos políticos: Derecho del Ciudadano a Cambiar su Gobierno

La ley otorga a los ciudadanos el derecho a cambiar su gobierno por la vía pacífica, y los ciudadanos ejercieron dicho derecho, en la práctica, mediante elecciones periódicas, libres y justas celebradas sobre la base del sufragio universal. Los miembros activos de la policía y el personal militar no pueden votar ni participar en actividades políticas partidistas.

Elecciones y Participación Política

En el 2004 el candidato del PLD, Leonel Fernández, obtuvo la presidencia en unas elecciones generalmente descritas como libres y justas por la Organización de Estados Americanos, por observadores independientes, y por la Junta Central Electoral. Los observadores también describieron las elecciones congresuales y municipales de 2006 como generalmente libres y justas.

Por ley, los partidos deben reservar a las mujeres el 33 por ciento de los puestos en sus listas de candidaturas para el Congreso Nacional y los consejos municipales; en la práctica, los partidos colocaban a las mujeres tan abajo en sus listas. Había dos mujeres entre los 32 miembros del Senado y 33 mujeres de los 178 miembros de la Cámara de Diputados, 3 mujeres en el Gabinete, y 5 mujeres entre los 16 jueces de la Suprema Corte.

Corrupción y Transparencia Gubernamental

La ley dispone de penalidades criminales para la corrupción en el sector público; sin embargo, el gobierno no aplicó la ley efectivamente, y hubo funcionarios involucrados en prácticas de corrupción con impunidad. De acuerdo a los indicadores

de gobernabilidad en todo el mundo del Banco Mundial la corrupción gubernamental fue un problema serio.

Funcionarios del gobierno llevaron a juicio una cantidad de casos de corrupción del sector público y privado, aunque parecía que había desgano de parte de las autoridades para investigar seriamente y preparar para juicio aquellos casos que involucran a altos funcionarios gubernamentales ya sea del actual gobierno como del anterior. En aquellos casos que llegaron a juicio, la acusación tuvo poco éxito en obtener condenas o penas de prisión. El uso de sanciones no judiciales como la destitución, o la transferencia, para con los miembros del servicio armado, los oficiales policiales, y otros funcionarios gubernamentales menores involucrados en la aceptación de sobornos y otros comportamientos corruptos, se aceleró pero en últimas instancias se proporcionaron incentivos insuficientes para contener los pequeños y omnipresentes actos de corrupción. La muy esparcida actitud de tolerancia de la sociedad hacia al menos algunas formas de corrupción complicó el problema.

Siguió operando una comisión presidencial para la ética y en contra de la corrupción, aunque con poco o cero impacto ya que carece de competencias bien definidas y estructuras de toma de decisiones. La Oficina del Inspector General del Poder Judicial, presidida por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, canceló a varios jueces de bajo rango por comportamientos indebidos.

Los procesos judiciales relacionados con el colapso fraudulento del Baninter, terminaron en octubre con la condena de tres acusados. Los comentaristas de la sociedad civil consideraron el juicio, que comenzó en mayo de 2006, como un gran reto a la impunidad; dos de los principales acusados, el antiguo presidente de Baninter Ramón Báez Figueroa y el economista Luis Álvarez Renta, alegadamente tuvieron fuertes nexos con los círculos políticos locales. El tribunal condenó a esos dos acusados a 10 años de prisión y a un tercero a 8 años.

La ley exige que el presidente y el vice-presidente, miembros del congreso, algunos presidentes de instituciones, y otros funcionarios como síndicos y regidores, así como a directores de impuestos internos y de aduanas, hagan su declaración de bienes y propiedades personales dentro del período del primer mes de ser nombrados y cuando "terminen sus funciones". Sin embargo, el cumplimiento fue desigual, la verificación inadecuada, y la información requerida no fue particularmente útil. El Departamento de Prevención a la Corrupción, oficina dentro del Ministerio Público, está a cargo de revisar estas declaraciones. En un examen de verificación, se encontró que el 60 por ciento de las declaraciones tenían grandes errores en los reportes, y una cantidad estaban incompletas.

La ley contempla el acceso público a la información gubernamental, con ciertos límites sobre la disponibilidad de la información pública sólo bajo circunstancias específicas (tales como la protección a la seguridad nacional), y establece penas de seis meses a dos años de prisión, y cinco años de prohibición de ocupar cargos públicos a los funcionarios gubernamentales que obstruyan el acceso a la información pública. Un tribunal puede revisar la decisión de una institución de negar acceso a la información. El primer uso significativo de esta ley ocurrió en mayo, cuando el periodista Luis Eduardo Lora ("Huchi") demandó a las autoridades por los documentos asociados al controversial y costoso proyecto subterráneo de obras públicas. Aunque las autoridades judiciales inicialmente ordenaron la entrega de los documentos, el poder ejecutivo apeló esta decisión ante la Suprema Corte sobre la

base de "seguridad nacional", pero ese tribunal le ordenó al gobierno (OPRET) proporcionar los documentos solicitados, y se cumplió con esta sentencia. Una segunda solicitud de información sobre el staff diplomático en el extranjero se manejó sin incidentes.

Sección 4 Actitud Gubernamental hacia las Investigaciones Internacionales y No Gubernamentales de las Violaciones a los Derechos Humanos

Una cantidad de grupos pro derechos humanos nacionales e internacionales operaron generalmente sin restricción gubernamental, investigando y publicando sus hallazgos sobre casos de derechos humanos. Aunque los funcionarios gubernamentales generalmente cooperaron y estuvieron atentos a sus opiniones, los grupos de derechos humanos que abogaban por los derechos de los haitianos y de las personas de ascendencia haitiana fueron una excepción importante y ocasionalmente se encontraron con el acoso del gobierno.

En marzo la Junta Central Electoral presentó un memo interno recomendando que se le retirara la ciudadanía a la activista dominico-haitiana Sonia Pierre, una acción vista por muchos como una represalia por su trabajo. El presidente de la JCE consecuentemente desautorizó el informe interno de investigación que se filtró, declarando que la solicitud se había hecho a solicitud de un congresista en particular.

Funcionarios gubernamentales protestaron en el extranjero por las muestras de filmes documentales como los "Sugar Babies" y "El Precio del Azúcar," producido por grupos activistas que abogan por mejores condiciones laborales y de derechos humanos en la industria del azúcar. En junio, en un esfuerzo por silenciar a los críticos en defensa de los derechos humanos, un cónsul general dominicano encabezó un grupo de personas para interrumpir un evento público donde el filme "Sugar Babies" se estaba presentando, ocasionando que los anfitriones cancelaran una discusión planeada para el final. En julio, el Senado aprobó una resolución alegando que los críticos de las condiciones laborales en la industria azucarera pertenecientes a la sociedad civil fueron motivados por un "profundo odio hacia la nación dominicana".

Durante su visita de octubre, los Relatores Especiales de la ONU sobre Racismo y Derecho de las Minorías, dijeron que ellos estaban muy preocupados por la seguridad de los defensores de los derechos de personas de ascendencia haitiana.

Entre los principales grupos nacionales se encuentran el Comité Dominicano Pro Derechos Humanos, la Comisión Nacional Pro Derechos Humanos, y el Instituto de Santo Domingo Pro Derechos Humanos. Hay también otras organizaciones más pequeñas, tanto laicas como religiosas, que abordan los derechos de la mujer, asuntos laborales y los derechos de los haitianos.

El gobierno nunca aplicó una ley de 2001 que ordena la creación de una oficina para el Defensor del Pueblo, Ombudsman.

Sección 5 Discriminación, Abuso Social y Trata de Personas

Aunque la ley prohíbe la discriminación por razones de raza o género, dichas discriminaciones existían, y el Gobierno rara vez reconocía su existencia ni se esforzaba en combatirla.

La Mujer

La violación sexual fue un problema serio y no reportado en su amplitud. Las penalidades por violación son de 10 a 15 años en prisión (o 10 a 20 años en casos de violación de una persona vulnerable o bajo otras circunstancias atroces) y una multa de aproximadamente de \$ 3,300 a \$ 6,600 (100,000 a 200,000 pesos). El estado puede procesar a un sospechoso de violación aún cuando la víctima no presente cargos, y las víctimas de violación pueden presentar cargos contra sus cónyuges. Las víctimas muchas veces no reportaron casos de violación porque el miedo al estigma social, así como la percepción de que la policía y el sistema judicial no harían el reparo apropiado. La policía fue reacia a manejar casos de violación y muchas veces animaron a las víctimas a buscar ayuda de las ONGs.

La violencia doméstica continúa siendo un serio problema. Conforme a la Ley contra la Violencia Doméstica, el Estado puede someter a la justicia casos por violación, incesto, agresión sexual y otras formas de violencia doméstica. La penalización de estos crímenes oscila entre uno y 30 años de prisión y conllevan multas que van desde los US\$20 hasta US\$7,000 (de 600 a 210,000 pesos dominicanos). Una ONG local estimó que el 24 por ciento de las mujeres entre los 15 y 49 años de edad ha sido víctima de abusos físicos.

En el Distrito Nacional, que incluye una gran parte de Santo Domingo con aproximadamente el 10 por ciento de la población del país, la Fiscalía tenía una Unidad de Prevención de la Violencia y Atención Especializada. Con 13 oficinas satélites en la ciudad, donde las víctimas de violencia pueden presentar denuncias, obtener asesoría legal gratuita, y recibir atención psicológica y médica. Se instruyó a la policía para que refiriera todos los casos de violencia doméstica y acoso sexual a estas instancias. Cada una de las oficinas contó con psicólogos profesionales como parte del staff para aconsejar a las víctimas de la violencia y para evaluar las amenazas de peligro inminente de una denuncia. Estas oficinas tenían la autoridad para emitir órdenes de restricción inmediatamente después de recibir las denuncias.

Aunque la cantidad de denuncias recibidas por la Unidad de Prevención de la Violencia y Atención Especializada aumentó, lo cual puede haber reflejado la creciente conciencia sobre los recursos disponibles para las víctimas, pocos casos llegaron a juicio. Hasta octubre, la unidad recibió 9,950 casos de violencia de género, de los cuales 8,596 fueron en contra de mujeres. Del total de casos, desestimó 227, envió 3,831 a mediación, 710 a juicio, investigó 4,127 casos, y declinó 1,055.

La Dirección Nacional para Asistencia de las Víctimas, coordina los esfuerzos de instituciones oficiales y no gubernamentales para ofrecer servicios a las víctimas de violencia. Dicha instancia tiene tres oficinas en Santo Domingo y en otras tres zonas del país. Estas nuevas entidades no sólo aceptaron las denuncias de las víctimas de violencia de todo el país, sino que ofrecieron asesoría legal y servicios de protección, y cuando era necesario, las víctimas fueron referidas a médicos o a psicólogos especialistas. La Procuraduría General y la Secretaría de la Mujer, así como varias ONGs, llevaron a cabo programas de alcance y entrenamiento sobre violencia doméstica y derechos legales.

La ONG Piedra Blanca operó un refugio para mujeres maltratadas y la Secretaría de la Mujer apoyó las operaciones de un centro para víctimas de violencia doméstica en Baní, donde las víctimas de abuso podían presentar la denuncia policial y recibir asesoría.

La prostitución es legal, aunque existen algunas prohibiciones contra las relaciones sexuales con menores y es ilegal que terceros obtengan beneficio financiero derivados de la prostitución. Sin embargo, el Gobierno, en general, no aplicó las leyes sobre prostitución. El turismo sexual seguía siendo un problema serio, sobre todo en Las Terrenas, Sosúa y Boca Chica. Varios grupos de derechos humanos reportaron la constante prostitución en los bateyes y en las zonas aledañas a la capital. Las organizaciones no gubernamentales llevaron a cabo programas sobre la prostitución y explotación sexual de menores dirigidos a los empleados de hoteles y de las zonas industriales, a trabajadores sexuales de ambos sexos así como a otros grupos de alto riesgo.

La ley prohíbe el acoso sexual en los lugares de trabajo, lo cual es considerado un delito menor y conlleva una posible pena de 1 año de prisión y una multa de hasta US \$333 (10,000 pesos); sin embargo, los líderes sindicales reportaron que las leyes sobre acoso no fueron aplicadas y que el acoso sexual era un problema.

A pesar de que la ley contempla que la mujer disfrute de la misma condición legal que el hombre, en la práctica, la mujer sufre discriminación. Las mujeres no disfrutaron del estatus socio-económico o de la igualdad de oportunidades con respecto a los hombres, y los hombres mantuvieron la mayoría de las posiciones de liderazgo en todos los sectores. En muchos casos las mujeres recibieron un pago menor que los hombres en trabajos de igual contenido y de igual capacidad. Algunos empleadores alegadamente hicieron exámenes de embarazo a las mujeres antes de contratarlas, como parte de los exámenes médicos requeridos. Aunque es ilegal la discriminación basada en estos exámenes, los líderes sindicales reportaron que a menudo, a las mujeres embarazadas no se las contrató, y que las empleadas que luego quedaban embarazadas, a veces, eran despedidas. No hubo ningún programa gubernamental eficaz para combatir la discriminación económica contra la mujer.

Menores

El Gobierno declaró su compromiso con el bienestar y los derechos del menor y trató de aumentar la protección de ellos, haciendo hincapié en la eliminación del trabajo infantil. El Consejo Nacional para Niños, Niñas y Adolescentes (CONANI), agencia pública no perteneciente al Gabinete, coordina la política pública de protección de los derechos humanos del menor y de administra el nuevo código. El gobierno no cumplió con las disposiciones de la ley para que CONANI reciba al menos 2 por ciento del presupuesto nacional y un mínimo de 5 por ciento de los presupuestos municipales para que sea dedicado a proyectos que beneficien a los menores.

Muchos niños nacidos en el país no fueron registrados al nacer. Un niño que no se registre después de su nacimiento queda indocumentado hasta que se haga una declaración tardía, y hubo limitaciones en cuanto a las declaraciones tardías. Los niños indocumentados, particularmente los de ascendencia haitiana, enfrentaron desafíos para acceder a la educación pública primaria (ver sección 2.d.).

La educación es libre, universal y obligatoria para todos los menores hasta el octavo grado, pero los mecanismos legales sólo contemplan la escolarización primaria, que

ha sido interpretada como hasta el cuarto curso. A pesar de que la Secretaría de Educación reportó una tasa de matriculación del 92 por ciento en los niveles del 1 al 8, un estudio gubernamental estimó que el nivel promedio alcanzado por los menores en las escuelas públicas era el quinto grado en las zonas rurales, y el sexto grado en las zonas urbanas.

Varios programas gubernamentales ofrecieron asistencia médica a menores en los hospitales públicos.

El abuso de menores, incluyendo abusos físico, sexual y psicológico, es un grave problema. CONANI reportó 215 casos de abuso sexual, 224 casos de abuso físico, y 251 casos de explotación sexual comercial de niños por debajo de los 18. Pocos de estos casos llegaron a los tribunales, por miedo a la vergüenza familiar, la falta de recursos económicos, o a la falta de conocimiento sobre la asistencia legal disponible. La Fiscalía de Santo Domingo informó que en la mayoría de los casos de abuso, el acusado era una persona cercana al niño, como un miembro de la familia o un amigo cercano de la misma. La ley establece que un niño maltratado sea llevado a un ambiente de protección.

Según los monitores nacionales, los casos de abuso infantil no son reportados en su totalidad debido a la tradicional creencia de que los problemas familiares deben ser tratados dentro de la familia. La ley contempla disposiciones sobre el abuso de menores, incluyendo los maltratos físicos y emocionales, la explotación sexual y el trabajo infantil.

La ley contempla penas de dos a cinco años de prisión y una multa de tres a cinco veces el salario mínimo para las personas culpables del delito de abuso de un menor. La multa se duplica si el abuso está relacionado con la trata de personas.

La Dirección Nacional para Asistencia de las Víctimas coordinó los esfuerzos de las organizaciones oficiales y no gubernamentales para ayudar a menores víctimas de violencia y abuso.

La trata y la explotación sexual de menores dentro del país fueron graves problemas, particularmente en las grandes áreas urbanas y en los destinos turísticos populares. Funcionarios gubernamentales establecieron que la prostitución infantil muchas veces se fundamentó en las necesidades económicas. Entre febrero y noviembre, la policía detuvo a 30 niños sospechosos de prostitución entre las edades de 10 y 16 en Boca Chica, Las Terrenas, Playa Dorado, y Santo Domingo.

El trabajo infantil fue un problema serio en el sector informal de la economía

Trata de personas

Aunque la ley prohíbe la trata de personas, se reportaron casos de trata de hombres, mujeres y menores hacia el país, desde el país y dentro del país.

Organizaciones internacionales estimaron que entre 30,000 y 50,000 mujeres dominicanas trabajaron en la prostitución alrededor del mundo, un tercio de las cuales fue víctima de la trata. Los países principales de destino estuvieron en Europa, el Caribe, y Latinoamérica. Los traficantes en el Caribe mantuvieron y en algunos casos fortalecieron sus redes. Mujeres entre 18 y 25 años de edad tuvieron el mayor riesgo de ser traficadas. Muchas víctimas eran madres solteras sin educación en busca de mejorar las condiciones de vida de sus hijos.

Hubo informes no confirmados de que en las plantaciones de azúcar se había dejado de transportar nuevos trabajadores indocumentados desde Haití por las medidas severas del gobierno ante la inmigración haitiana, la inversión de los productores privados de azúcar en la mecanización, y el cese de cultivos de caña a gran escala en las plantaciones estatales. Sin embargo, a fin de año hubo ONGs que reportaron el testimonio de testigos oculares que vieron traer a nuevos obreros para la cosecha, algunos desde otros sectores agrícolas, mientras otros fueron reclutados en Haití.

ONGs estimaron que hubo cientos de grupos de tráfico y trata de extranjeros operando dentro del país. De acuerdo con la ONG Centro para la Orientación e Investigación Integral (COIN) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), las organizaciones de trata eran típicamente pequeñas organizaciones. Individuos en el país reclutaban a las personas para ser traficadas y obtuvieron documentos de viaje y de identificación. Los traficantes frecuentemente conocen a las mujeres por medio de amigas y de la familia; ellos les prometen algún tipo de empleo, obtienen documentos falsos o legítimos para las mujeres, y muchas veces les retuvieron sus pasaportes luego de llegar al país destino. Se ha reportado que las organizaciones de trata recibieron de US\$ 5,000 a US\$ 8,000 (de 150,000 a 240,000 pesos) por la trata de una mujer con propósitos de prostitución.

La ley incluye penalidades por la trata de 15 a 20 años de prisión y una multa de hasta 175 veces el salario mínimo mensual. El Código del Menor establece penalidades para el abuso sexual de niños de 20 a 30 años de prisión y multas de 100 a 150 veces el salario mínimo.

La Unidad en Contra el Tráfico y Trata de Personas de la Procuraduría coordinó la investigación y persecución de todos los casos de trata de personas. Las unidades de la Policía Nacional, la Dirección de Migración, y la Procuraduría General, se enfocaron en la trata de personas, así como también lo hizo el Comité Interinstitucional para la Protección de la Mujer Migrante. El departamento contra el tráfico de la Dirección de Migración coordinó con la Procuraduría y la Policía Nacional encontrar y procesar a las personas dedicadas al tráfico de mujeres para la prostitución y la explotación sexual comercial.

Dentro de la Procuraduría General, las estadísticas del Departamento de Tráfico y Trata de Personas, mostró 16 investigaciones activas, tres sometimientos a la justicia y cero condenas, debido a que ningún caso había todavía alcanzado una disposición final. Se llevaron a cabo también investigaciones bajo otras leyes, incluyendo una nueva ley criminalizando la distribución electrónica de la pornografía infantil, pero no se hicieron arrestos. En la Oficina de Trata y Tráfico de la Policía Nacional, hubo 70 casos de tráfico humano con acusaciones de fraude, más que por trata o tráfico.

Informes de prensa alegaron que funcionarios consulares y migratorios de alto nivel se involucraron directamente en el tráfico de nacionales chinos, algunos de los cuales fueron víctimas de la trata. El gobierno realizó esfuerzos para investigar a funcionarios públicos que facilitaron, condonaron o fueron cómplices en las actividades de trata o el tráfico de inmigrantes, pero la falta de recursos y de acceso a comunidades étnicas cerradas les impidieron llevar casos a la justicia. En junio, el fiscal del Distrito Nacional presentó cargos contra Doris Altagracia Vásquez, una funcionaria de alto nivel de la Secretaría de Estado de Trabajo, por involucrarse en una organización de tráfico atrayendo a los ciudadanos con falsas ofertas de trabajo

en España y Canadá. En los pasados tres años la Dirección de Migración canceló a 400 inspectores por posible participación en el tráfico y trata de personas.

En agosto la Policía rescató a 14 mujeres haitianas en Santo Domingo que estaban siendo forzadas a realizar actos sexuales para un portal de Internet pornográfico. Una de las mujeres presentó querrela contra un nacional extranjero, declarando que ella y otras mujeres estaban siendo forzadas a realizar actos lascivos y sexuales que luego eran subidos a la red y vendidos por el Internet. El Fiscal del Distrito Nacional acusó al nacional extranjero de tráfico de personas y lo deportó pero no acusó a dos extranjeros adicionales. Las víctimas del tráfico fueron detenidas por varios días y también deportadas.

El gobierno les proporcionó asistencia a algunas víctimas del tráfico tanto en el extranjero como en el país, pero confió en las ONGs y las organizaciones internacionales para dar la mayoría de servicios de protección. La Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores desarrolló una red mundial de funcionarios consulares entrenados para reconocer y asistir a las víctimas de la trata de personas. El gobierno continuó trabajando con las ONGs para desarrollar programas de entrenamiento laboral para las mujeres devueltas. Cuando se repatriaba del extranjero a las víctimas de la trata, se les daba un registro de control que iba a su expediente policial oficial y eran entrevistadas por un inspector de migración. Según el COIN, la mayoría de las víctimas estaban demasiado avergonzadas o atemorizadas para buscar acción legal contra los traficantes, y las víctimas recibieron limitada o ninguna ayuda psicológica.

Hubo varios refugios administrados por iglesias para los niños que escapaban de la prostitución. Los refugios públicos para las víctimas de la violencia doméstica generalmente no fueron accesibles para las víctimas del tráfico. Sin embargo, por primera vez en la vida, el gobierno puso a varias víctimas extranjeras de la trata bajo la custodia de la OIM luego de una detención breve para procesarlas, en lugar de mantenerlas en la cárcel o en centros de detención de inmigración antes de su deportación. La OIM les ofreció asesoría psico-social a las víctimas. En julio el gobierno y algunos socios lanzaron una campaña de publicidad para la línea telefónica directa de anti-trata de la Procuraduría General. Esta línea telefónica directa, en existencia desde 2005, fue un recurso de información sobre la prevención del tráfico, así como un mecanismo para obtener acusaciones formales y denuncias.

En octubre, el Presidente creó una Comisión Nacional contra la Trata de Personas para combatir la trata por medio de la cooperación interinstitucional con un plan nacional. Las instituciones que conforman esta comisión son las Secretarías de Estado de Relaciones Exteriores, Interior y Policía, Educación, Turismo, Salud Pública, de la Mujer y el Consejo Nacional para la Niñez.

La Unidad de Prevención del Departamento Contra el Tráfico Ilícito y Trata de Personas de la Procuraduría General, en coordinación con las Secretarías de Trabajo y de Educación, continuó sus entrenamientos de concientización en las escuelas del país. Los cursos enseñaban a los niños sobre los peligros del tráfico de extranjeros, la explotación sexual comercial, y la trata de personas.

El COIN y la OIM ofrecieron asesoría a las mujeres que planeaban aceptar ofertas de trabajo en Europa y el Caribe oriental sobre migración, salud y otros problemas, incluyendo el peligro de la trata de personas, la prostitución forzada y la servidumbre doméstica. El COIN administró el Centro de Salud e Información Migratoria para la

Mujer Migrante, el cual efectuó campañas comunitarias de educación en las zonas de alto riesgo sobre diferentes asuntos, entre ellos, ciudadanía, requisitos del trabajo legal, el peligro de la trata de personas, y servidumbre doméstica. Con la ayuda de la OIM, el COIN también ofreció un nivel mínimo de servicios clínicos y clases de educación para adultos a las mujeres repatriadas.

Personas Discapacitadas

A pesar de que la ley prohíbe la discriminación contra las personas discapacitadas, estos individuos sufren discriminación en el empleo y en la obtención de otros servicios. La ley provee el acceso físico de las personas discapacitadas a todos los edificios nuevos públicos y privados, pero las autoridades no aplicaron esta disposición. La Asociación Dominicana de Rehabilitación, que tiene 17 sucursales por todo el país, recibió un subsidio de la Secretaría de Salud Pública para ofrecer servicios de rehabilitación a los discapacitados.

La discriminación contra personas con enfermedades mentales era frecuente y existían pocos recursos destinados a los enfermos mentales.

Minorías nacionales, raciales y étnicas

Hay un gran prejuicio racial contra las personas de tez muy oscura, y el gobierno hizo casi nada para lidiar con este problema. En particular, existe un gran prejuicio contra los haitianos, un hecho que coloca en desventaja a muchos haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana, así como a otros extranjeros de tez oscura. Pocos oficiales del Gobierno reconocieron la existencia de dicha discriminación; otros negaron su existencia con regularidad y públicamente.

Las personas de color más oscuro algunas veces reportaron que les negaban el acceso a tiendas, bares nocturnos, y restaurantes. En julio, a varios extranjeros se les negó la entrada a un popular bar en Santo Domingo, llamado Loft. El club ha tenido un historial de negarles selectivamente la entrada a personas de compleción más oscura y cabello africano. En respuesta a una protesta de una misión diplomática extranjera, la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores emitió una declaración en la que estaba de acuerdo con la protesta.

Organizaciones no gubernamentales reportaron incidentes donde a las personas de color más oscuro se les negó el acceso o servicios en bancos, se les negó inscripción en las escuelas privadas, y se les negó registro de nacimiento en los hospitales.

En su visita de octubre, los Relatores Especiales de la ONU para Racismo y Derechos de las Minorías instaron a las autoridades a reconocer la existencia de racismo y discriminación en contra de las minorías, a adoptar un plan de acción nacional para abordar el problema, a revisar la regulación de la JCE que resultó en la revocación de documentos de identidad de haitianos y a cesar la repatriación masiva de haitianos.

Los haitianos continúan inmigrando al país en búsqueda de oportunidades económicas, y el gobierno repatrió a muchos de ellos. Las autoridades de migración y las fuerzas de seguridad efectuaron durante todo el año redadas periódicas para localizar y repatriar a las personas indocumentadas de ascendencia haitiana. Algunos de los que fueron sacados del país reportaron que se les negó la oportunidad de demostrar que eran residentes legales, de hacer los arreglos para sus familias y propiedades, o expresar un miedo creíble de persecución o tortura si regresan a

Haití. Los funcionarios de Migración y de los organismos de seguridad algunas veces confiscaron y destruyeron los documentos de residencia de los deportados. En algunos casos los deportados con los debidos documentos legales, recibieron permiso para regresar.

Muchos inmigrantes haitianos vivían en casuchas o campos de trabajo conocidos como bateyes. Como en muchas áreas pobres y en otras partes del país, éstos eran ambientes duros con poca o ninguna energía eléctrica, usualmente sin agua potable en las llaves, y sin escuelas adecuadas. En muchos bateyes, la asistencia médica era rudimentaria o no estaba disponible a tiempo y el agua limpia estuvo raramente disponible. Muchos residentes de bateyes, sin documentación, sentían que tenían muy poca opción que no fuera permanecer en sus comunidades, donde se sentían relativamente seguros de los riesgos de deportación y de acoso existentes en el país.

Aunque las ONGs de derechos humanos, la Iglesia Católica, y activistas describieron las condiciones de vida en los bateyes como esclavitud en el mundo moderno, las compañías privadas en el sector azucarero, llevaron a cabo mejoras en algunas facilidades durante el año.

Otros Abusos y Discriminaciones Sociales

Las personas con VIH/SIDA, sobre todo las mujeres, son víctimas de discriminación en el trabajo y en otras partes. Se estima que entre 80,000 y 222,000 personas están infectadas por esta enfermedad en el país. Conforme a la Alerta Pro-Derechos Humanos y Amnistía Internacional, a los trabajadores de muchas industrias se les administran las pruebas obligatorias del HIV en el trabajo o cuando van al médico o solicitan seguro médico. Los trabajadores o pacientes con la enfermedad pueden ser cancelados de sus trabajos o se les puede negar el debido cuidado médico. Aunque la ley prohíbe el uso de las pruebas del HIV para seleccionar a los empleados o para servicios médicos no relaciones con dicha enfermedad, hubo casos conocidos en que esta ley no fue aplicada, a pesar de que se presentaron quejas oficiales.

Sección 6 Derechos de los trabajadores

a. Derecho de Asociación

La ley contempla la libertad para organizarse en sindicatos, y todos los trabajadores, exceptuando los militares y la policía, eran libres de organizarse y de unirse al sindicato de su elección. La fuerza laboral organizada representaba un 8 por ciento de la fuerza laboral. La ley provee el reconocimiento automático de un sindicato si el Gobierno no actúa con relación a su solicitud en un plazo de 30 días.

La ley que prohíbe a las compañías despedir a los organizadores o líderes sindicales, fue aplicada de manera inconsistente, y las penalidades eran insuficientes para impedir que los patronos violaran los derechos de los trabajadores. Hubo informes de intimidación por parte de los patronos para impedir las actividades de los sindicatos, especialmente en las zonas francas, aunque las empresas de zonas francas deben cumplir con las leyes laborales nacionales. La Federación Dominicana de Trabajadores de Zonas Francas (FEDOTRAZONAS) denunció actividades anti-sindicalistas en la empresa TOS Dominicana en Bonaó. Hubo alegatos de que la administración de la compañía realizó una campaña en contra de los miembros y líderes del sindicato, la cual incluyó incentivos en efectivo o promociones a cambio

de renunciar a la membresía y a las actividades del sindicato en un esfuerzo por impedir el alcance de suficiente membresía para establecer negociaciones de derechos colectivos. En octubre, una comisión especial de la Secretaría de Estado de Trabajo determinó que FEDOTRAZONAS tenía una mayoría de obreros y que tenía que ocurrir una negociación colectiva. Aunque en diciembre los propietarios iniciaron acción legal en contra de la determinación de la Secretaría y se negaron a participar en negociaciones patrocinadas por el gobierno, más tarde ellos retiraron la acción legal y se reunieron informalmente con el sindicato.

El Congreso del Sindicato Internacional de Comercio, reportó que a los trabajadores en una compañía de exportación agrícola en el norte del país se les devolvían repetidas veces sus solicitudes para registrar sus sindicatos, a pesar de cumplir con los requisitos mínimos de 20 miembros. La compañía alegadamente siguió haciendo despidos masivos de 80 a 100 personas a la vez. Los trabajadores se las arreglaron para obtener el registro legal del sindicato; sin embargo, la compañía alegadamente continuó su campaña anti-sindical y discriminó abiertamente a los miembros del sindicato, a quienes se les forzó a trabajar tiempo extra y se les negó el agua y el transporte dentro y hacia fuera de los campos.

b. Derecho a Organización y Negociación Colectiva

La negociación colectiva es legal y debe utilizarse en las empresas en las que el sindicato ha logrado el apoyo de una mayoría absoluta de sus empleados. Pocas compañías tienen pactos de negociación colectiva y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) consideraba que los requisitos para lograr tales pactos como excesivos y un impedimento a la negociación colectiva.

La ley establece un sistema de tribunales laborales para lidiar con las disputas. En tanto varios casos lograron hacer su camino en las cortes laborales, el proceso frecuentemente fue largo y los casos permanecieron pendientes por varios años. Un estudio hecho por la Fundación para la Institucionalidad y Justicia, una ONG local, demostró que el tiempo promedio de resolución de un caso era de 15.3 meses en los tribunales de primera instancia y de 16.4 meses en los tribunales de apelación. Muchos participantes informaron que la mediación facilitada por la Secretaría de Estado de Trabajo fue el método más efectivo para resolver las disputas entre los trabajadores y las compañías.

La ley contempla el derecho de huelga de los trabajadores (y para patronos del sector privado, la prohibición de entrada a la empresa a los empleados), pero las huelgas formales no eran comunes. Los requisitos formales para una huelga incluyen el apoyo de una mayoría absoluta de todos los empleados de la empresa estén o no sindicalizados, un intento previo de resolver el conflicto por mediación, notificación por escrito a la Secretaría de Trabajo y un periodo de espera de 10 días después de la notificación antes de proceder con la huelga.

A los empleados del gobierno y al personal esencial de servicio público no se les permite hacer huelgas.

Unos pocos sindicatos representaban a un pequeño número de obreros haitianos, quienes están bajo el amparo del Código Laboral sin tener en cuenta su situación legal. Varias ONG informaron que la mayoría de los obreros haitianos en las

industrias agrícolas y de la construcción no ejercían sus derechos bajo el código laboral, temiendo la pérdida del empleo o la deportación.

El Código Laboral se aplica en las 57 zonas francas (ZF) reconocidas por el gobierno, las cuales empleaban aproximadamente 155,000 trabajadores. Según el Consejo Nacional de Sindicatos, los sindicatos estaban activos en sólo ocho compañías de ZF, y sólo cuatro sindicatos habían establecido derechos de negociación colectiva. Las regulaciones sobre las condiciones de trabajo y su aplicación en las zonas francas no diferían mucho de las del resto del país en general, aunque las condiciones laborales eran a veces mejores, y el salario era ocasionalmente mayor. Las horas extras obligatorias eran una práctica común.

Se reportó intimidación extensa y encubierta por parte de los patronos en las zonas francas para prevenir la actividad sindical. Los sindicatos en las zonas francas reportaron que sus miembros vacilaban en discutir las actividades sindicales en el trabajo, aun en tiempo de descanso, por temor a perder sus empleos. La mayoría de los sindicatos en las zonas francas estaban afiliados a la Federación Nacional de Trabajadores de Zonas Francas o con FEDOTRAZONAS. FENATRAZONAS estimó que menos del 10 por ciento de los trabajadores de zonas francas pertenecían a sindicatos. Muchos de los principales fabricantes de las zonas francas tenían códigos voluntarios de conducta que incluían cláusulas sobre la protección de los derechos de los trabajadores generalmente consistentes con la Declaración de la OIT sobre los Principios Fundamentales y Derechos Laborales. Sin embargo, los trabajadores no siempre conocían dichos códigos o los principios contemplados en los mismos.

c. Prohibición del Trabajo Forzado u Obligatorio

La ley prohíbe toda forma de trabajo forzado u obligatorio, incluyendo niños, pero hubo informes de tráfico de niños dentro del país. Las horas extras obligatorias, práctica común, fue varias veces implantada por medio del cierre de las puertas o la pérdida del pago o del empleo para quienes se negaran.

Prohibición del Trabajo Infantil y Edad Mínima de Empleo

A pesar que la ley prohíbe el empleo de niños menores de 14 años y pone condiciones explícitas al empleo a menores de 16 años, el trabajo infantil siguió siendo un serio problema, aunque hubo evidencia que disminuyó durante el año. Un programa de una ONG reportó que rescató a 8,449 niños de las condiciones laborales de explotación y evitó que 16,990 niños entraran a la fuerza laboral. Las regulaciones limitaban el número de horas de trabajo para menores entre 14 y 16 años a seis horas diarias, prohibían el empleo a personas menores de 18 en ocupaciones peligrosas y en establecimientos donde se sirve alcohol, y limitaban el horario nocturno. Se pueden aplicar multas y sanciones a las compañías que emplean a menores de edad. Aunque el gobierno aplicó estas regulaciones en el sector formal, el trabajo infantil fue un gran problema en el sector informal, fuera del alcance de las regulaciones.

El trabajo infantil se practicaba principalmente en el sector informal de la economía, en pequeños negocios, en domicilios y la agricultura. Muchas veces los menores acompañaban a sus padres al trabajo en los campos agrícolas, en parte porque los padres no tenían donde dejar a sus hijos, ya que las escuelas en el campo sesionaban sólo unas pocas horas al día. La explotación sexual comercial de los menores seguía siendo un problema, sobre todo en los destinos turísticos.

Continuó habiendo evidencias inconclusas de que algunas familias pobres haitianas hacían acuerdos para que familias dominicanas “adoptaran” y emplearan a sus hijos, con la esperanza de asegurarles un mejor futuro. Los padres adoptivos comúnmente consideraron a los niños como suyos, y algunas veces les daban a los padres biológicos un pago monetario o una compensación en ropas y comida. En algunos casos se reporta que los padres adoptivos no trataban al niño adoptado como un miembro pleno de la familia y esperaban que trabajara en la casa o en el negocio familiar en vez de asistir a la escuela, lo cual resultó en una especie de servidumbre forzada de los menores y adolescentes.

La Secretaría de Estado de Trabajo y otras instituciones gubernamentales, así como organizaciones de la sociedad civil, colaboraron con el Programa para la Eliminación del Trabajo Infantil de la OIT y otras organizaciones de derechos laborales internacionales, para continuar con los programas de combate al trabajo infantil. Estos incluían programas para eliminar el empleo de menores en zonas agrícolas peligrosas y en las regiones arroceras. El esfuerzo también incluía un programa para combatir la explotación sexual de menores en destinos turísticos populares como Boca Chica, Sosúa y Las Terrenas. Estos programas ofrecían apoyo psicológico y asistencia médica, devolvían a los niños a las aulas, y reunificaban a los niños con sus familias y comunidades en la medida de lo posible. Los programas también ofrecieron asistencia legal para menores víctimas de la explotación para arrestar y procesar a los explotadores.

La Secretaría de Estado de Trabajo confirmó, a través de inspecciones al sitio que los bateyes de los consorcios ya no utilizaban el trabajo infantil en sus propiedades. Una fuente creíble, sin embargo, declaró que el trabajo infantil todavía se podía encontrar en estos establecimientos.

El Comité Nacional contra el Trabajo Infantil planea eliminar las peores formas de trabajo infantil, estableció objetivos, identificó prioridades, y asignó responsabilidades de manera que el trabajo explotador se combata eficientemente y que el número de niños trabajando se reduzca significativamente para el 2016. En 2006 el plan retiró a 2,079 niños del campo laboral y evitó que 1,330 niños se involucraran en la explotación laboral, y la segunda fase del plan comenzó en diciembre.

Las Secretarías de Trabajo y de Educación continuaron brindando apoyo a los programas de Lucha Contra el Trabajo Infantil a través de la Educación, los cuales establecieron varios campamentos para una gran cantidad de niños y adolescentes.

No hubo ninguna información confirmada en cuanto a trabajo infantil forzoso en el sector formal.

e. Condiciones Laborales Aceptables

El poder ejecutivo fija los niveles de salario mínimo para los empleados públicos, y el Comité Nacional de Salarios fija los del sector privado, a excepción de trabajadores de las zonas francas, los ingenios, y las industrias de la construcción, hoteleras y fabricantes de zapatos. El salario mínimo mensual es de aproximadamente \$139 (4,450 pesos) en las zonas francas y de \$200 (6,400 pesos) fuera de las zonas francas. El salario mínimo para el sector público era aproximadamente \$81 (2,600

pesos) mensuales. El salario mínimo para agricultores cubiertos por las regulaciones sobre salario mínimo era aproximadamente \$4.70 (150 pesos) por hora para un día laboral de 10 horas. Los obreros de la caña estuvieron sujetos a un salario mínimo especial más bajo para la industria azucarera, \$2.50 (80 pesos) al día. El salario mínimo nacional no provee un estándar de vida decente para el trabajador y su familia.

La ley establece un horario estándar de trabajo 44 horas a la semana y estipula que todo trabajador tiene derecho a 36 horas de descanso ininterrumpido por semana. La ley contempla el pago de las horas extraordinarias que son obligatorias en algunas compañías de las Zonas Francas.

En los ingenios azucareros, a los cortadores de caña por lo general se les paga conforme al peso de la caña cortada en vez de percibir un salario por horas trabajadas. Los cortadores de caña sospecharon fraude en parte de los operadores de estación de peso y observaron que algunas veces los patronos no proveen camiones o carretas para transportar la caña recién cortada al final del día, lo que provoca que la remuneración del obrero al completar el trabajo del día sea inferior porque la caña se seca durante la noche y pesa menos. Funcionarios de la compañía negaron que hubiera retrasos en el transporte de la caña, resaltando que cualquier retraso iría en detrimento a la operación de sus negocios. La cantidad de caña que un trabajador podía cortar variaba, pero la mayoría de los trabajadores más jóvenes y en mejores condiciones físicas pudieron cortar de dos a tres toneladas de caña en un día, produciendo un salario de \$5.00 a \$7.50 (160 a 240 pesos). Sin embargo, a los trabajadores más viejos, con menores condiciones físicas se les pagaba sólo por la cantidad de la caña que ellos cortaron, aún si la cantidad era menor que el salario mínimo. Además, durante los seis meses fuera de la zafra, a los trabajadores en algunas plantaciones de azúcar que optaron por permanecer en sus comunidades se les ofrecían pequeños trabajos como desyerbar propiedades, lo cual generalmente era insuficiente para ganar el salario mínimo legal.

Las condiciones de los trabajadores agrícolas eran pobres. Los trabajadores en la industria azucarera, que vivían en los bateyes tenían escuelas, facilidades médicas, agua potable y sistemas de alcantarillado inadecuados. Los empleadores en la industria de la caña de azúcar alegadamente retenían una porción de los salarios para garantizar su regreso para la próxima zafra. Los trabajadores de la caña de azúcar muchas veces no recibieron los servicios médicos o pensiones debidos aunque se hicieron las deducciones de sus pagos.

El Instituto Dominicano para la Seguridad Social (IDSS) establece las condiciones de seguridad y sanitarias en el trabajo. Tanto el IDSS como la Secretaría de Trabajo tienen un pequeño cuerpo de inspectores encargados de imponer los estándares. La Secretaría de Trabajo tenía 195 inspectores activos. Los trabajadores se quejaron de que los inspectores no estaban entrenados y que no respondían a las quejas de salud y de seguridad. A pesar de que la ley requiere que los patronos ofrezcan un ambiente de trabajo seguro, en la práctica, los obreros no podían alejarse de situaciones laborales peligrosas sin perder el empleo.